

SÁNCHEZ SUSARREY

➡ El gobierno de Felipe Calderón ha cambiado de estrategia. Aunque tardó en hacerlo, combate ahora las redes de protección tejidas por los narcotraficantes.

Iceberg

JAIME SÁNCHEZ SUSARREY

¿Se va ganando o perdiendo la guerra contra el narcotráfico? Depende del punto de vista. La fuga de 53 presos, por la puerta grande y custodiados por un comando disfrazado (?) de policías federales y afís, no es un signo alentador. Tampoco el atentado contra el subprocurador de Tabasco. Álvarez Gutiérrez escapó de milagro a un ataque perpetrado por 25 sicarios en seis automóviles.

Los niveles de violencia y corrupción son cada vez mayores. ¿Y qué decir de los 10 alcaldes y los 20 funcionarios del gobierno de Michoacán aprehendidos, incluido el procurador de Justicia? Su detención constituyó un severo golpe a *La Familia*, pero muestra también la enorme complejidad del problema.

Lo cierto es que la estrategia del gobierno federal ha dado un giro. Ya no se combate sólo a los narcotraficantes, sino a las redes de protección que han tejido. En esta nueva estrategia las labores de inteligencia son fundamentales. No sorprende, por lo tanto, la magnitud del operativo. Lo que sorprende es que el gobierno federal haya tardado tanto tiempo en orientar sus baterías hacia ese flanco.

La colusión de funcionarios, políticos y capos es tan vieja como el tráfico de drogas. El giro muestra y confirma que la estrategia anterior era y es, por sí sola, insuficiente para enfrentar al crimen organizado. Pero ¿de qué tamaño es el problema? ¿Cuántos municipios más están en situación semejante? ¿Qué pasa en otros estados como Guerrero,

Veracruz, Sinaloa, Aguascalientes y los de la franja fronteriza con Estados Unidos, particularmente Chihuahua y Tamaulipas? Y eso sin mencionar ciudades como Tijuana y Juárez.

Hay quien afirma que más del 50 por ciento de los municipios están ya bajo la férula de los narcotraficantes. Imposible saberlo a ciencia cierta. De lo que no hay duda, es que los 10 municipios de Michoacán son apenas la punta del iceberg.

Otra forma de medir la dimensión del problema es la penetración social. Según David Johnson, subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, en México hay 150 mil personas involucradas directamente en el narcotráfico y otras 300 mil que cultivan y procesan marihuana y opio. Si el cálculo es correcto, habría

450 mil individuos vinculados con el tráfico de drogas.

Pero no sólo eso. En algunos municipios de Michoacán hubo protestas y movilizaciones por la detención de sus alcaldes. No es extraño. *El Cede*, número dos de *La Familia*, actuaba abiertamente y adiestraba jóvenes en sus centros de "recuperación". Hay, en consecuencia, una dimensión social y cultural que no se debe soslayar. Las protestas de este año contra la presencia del Ejército en varias ciudades de la República fueron un indicador muy tenue de lo que está ocurriendo en la realidad.

Por otra parte, hay que interrogarse hasta dónde llegan los niveles de corrupción. El gobierno de Michoacán estaba im-



plificado en los más altos niveles. La renuncia del procurador y la captura de una asesora de Leonel Godoy, ahora sujetos a investigación, lo confirman. Cuesta trabajo creer que el gobernador no supiera o fuera totalmente ajeno a esta circunstancia.

Es muy probable que no se vaya a abrir una investigación previa contra Godoy para evitar repercusiones políticas. Pero todo apunta en el mismo sentido. Donde los narcotraficantes han sentado sus reales, los gobernadores se ven sometidos a presiones y se enfrentan a una disyuntiva: coludirse o hacerse de la vista gorda.

Son muy pocos los que deciden enfrentarse al crimen organizado. A final de cuentas, la mayoría se excusa con la tesis de que el combate contra el narcotráfico

es una responsabilidad federal. Morelia no es México, pero sí es emblemática de lo que ocurre en muchos estados.

El operativo en Michoacán fue, sin duda, eficaz. Sin embargo, la reacción de los partidos de oposición ha sido escandalosa y estridente. Prácticamente todos denunciaron intenciones y objetivos electorales. El propio Leonel Godoy planteó, inicialmente, que se había violado la soberanía de su estado.

Sin embargo, la pregunta no es si el operativo tendrá efectos políticos o no. Porque es obvio que ya los está teniendo. La cuestión es si los acusados son culpables o no. Así que sólo en el caso de que el gobierno federal no lograra acreditar los delitos se podría denunciar una intención electorera.

Porque de otro modo, habría que convocar a los doctores en equidad electoral para

que legislaran al respecto. Y así como se ha prohibido que los particulares compren espacios en radio y televisión para no alterar la equidad en las campañas, se debería prohibir al gobierno federal efectuar detenciones y operativos que "benefician" al partido en el gobierno y "lastiman" a la oposición.

No hay que echar las campanas al vuelo. Estamos, como dije arriba, ante la punta del iceberg. Pero no sólo eso. Hay flancos en los que no se ha avanzado nada. El Fondo Monetario Internacional estima que en México se lavan 25 mil millones de dólares anuales. La Procuraduría General de la República es más modesta. Según sus cálculos sólo son 10 mil millones de dólares.

Lo cierto es que cada año se incautan recursos al narcotráfico por menos del 1 por ciento de las cifras de la PGR. Ante semejante cantidad de dinero, capaz de corromper al más honrado, no se puede ser optimista. Y menos aún, cuando las reacciones de la clase política son irresponsables y demagógicas.

No hay unidad ni intención de resolver el problema. Si las hubiera ya se habrían tomado medidas drásticas. La verdad es que se están prescribiendo aspirinas, como la coordinación de las policías federales, estatales y municipales, a un enfermo que tiene cáncer. Por algo será.

El grado de penetración social que ha alcanzado el narcotráfico es una cuestión que no debe pasarse por alto; tampoco el hecho de que la corrupción en Michoacán ha llegado a los más altos niveles.